



Ciudad de México, 26 de octubre de 2023

Vistas las constancias que integran el procedimiento de acceso a la información pública, relativo a la solicitud de información con número de folio **330026323002725**, para resolver respecto de la **clasificación parcial de la información como confidencial** requerida por la **Oficialía Mayor** con base en lo siguiente, y:

R E S U L T A N D O

1. Solicitud de información. El quince de septiembre de dos mil veintitrés, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió la solicitud de información con número **330026323002725**, mediante la cual se requirió:

Descripción de la solicitud: “Oficios y correos electrónicos que hayan generado en la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas” (sic)

Medio de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT.”

2. Turno. En esa misma fecha, mediante oficio número UT.4676/2023, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público turnó la citada solicitud a la Oficialía Mayor, para su debida atención.

3. Ampliación de plazo. El veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficio mediante el cual la Oficialía Mayor solicitó la ampliación del plazo para atender la solicitud, misma que fue aprobada por el Comité de Transparencia mediante la resolución SHCP/C.T.924/2023 del once de octubre.

4. Respuesta. El once de octubre dos mil veintitrés, se recibió en la Unidad de Transparencia de la Secretaría, oficio mediante el cual, la Oficialía Mayor manifestó lo siguiente:

“[...]

el particular requirió se le proporcionara la siguiente información:

1. Oficios generados en la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas (UNCP), y



2. Correos electrónicos generados en la UNCP.

Con relación al contenido identificado en el numeral **1**, se informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la UNCP, se localizó un total de **583 archivos** que obran en un total de **1741 fojas útiles**, equivalentes a **423 MB**, en los cuales constan los oficios generados en dicha unidad, durante el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2022 al 15 de septiembre de 2023.

En ese sentido se ponen a disposición de la persona solicitante dichos archivos, toda vez que constituyen la expresión documental vinculada al requerimiento de información del particular, en las siguientes modalidades de entrega:

- **Copia simple y/o certificadas**, siendo un total de **1741 fojas útiles**, previo pago de los derechos correspondientes, **con la gratuidad de las primeras 20 copias**;
- **Reproducción en un Disco Compacto (CD)**, previo pago por concepto de reproducción;
- **Consulta directa**, con la opción de que el particular acuda, con su medio de almacenamiento propio [**USB o disco externo**], a efecto de no generar mayores gastos para la obtención de la información, es decir, de privilegiar la gratuidad de la información, en la oficina y con el servidor público Lcdo. Bruno Soto Gallardo, habilitado para tal efecto, ubicado en las instalaciones de Palacio Nacional, sin número, edificio D, piso 2, colonia Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06060, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas; o bien,
- **Envío por correo certificado**, previo pago por concepto de reproducción y envío.

Lo anterior, **en virtud de que dicha información rebasa las capacidades técnicas, pues superan los 20 Megabytes permitidos por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), modalidad de entrega elegida por el particular**, conforme a los artículos 130, cuarto párrafo, 136 y 145 de la Ley Federal, que establecen lo siguiente:

Artículo 130. [...]

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, **conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.**
[...]



Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. **Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.**

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

- I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
- II. El costo de envío, en su caso, y
- III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.
..."

Por su parte, los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública señalan lo siguiente:

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
[...]

XIII. Modalidad de entrega: El formato a través del cual se puede dar acceso a la información, entre los cuales se encuentra la consulta directa, la expedición de copias simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos aquellos que resulten aplicables derivados del avance de la tecnología; [...]

Vigésimo noveno. Se privilegiará el acceso en la modalidad de entrega y de envío elegidos por el solicitante, en el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega en formatos abiertos; **cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer todas las modalidades de entrega disponibles;** en cualquier caso, se deberá fundar y motivar la modificación respectiva, lo que deberá notificarse al solicitante y registrarse en el Sistema, cuando proceda.



De conformidad con los artículos antes citados, la obligación consiste en otorgar acceso a los documentos que se encuentren en los archivos o que estén obligados a documentar las dependencias y entidades de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. Asimismo, **cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.**

En concordancia con lo anterior, el **Criterio 08/17** emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dispone lo siguiente:

“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.”

Del citado Criterio, se desprende que el sujeto obligado debe privilegiar en todo momento el acceso a la información en la modalidad de entrega elegida por el solicitante; sin embargo, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, **la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado** justifique el impedimento para atender la misma, y notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega, situación que en el presente caso se actualiza.

No se omite señalar que **21 archivos** (de los 583 referidos) correspondientes a oficios generados en la UNCP, en el periodo antes mencionado, **se proporcionan en versión pública** toda vez que en dichos documentos se contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial, consistente en el nombre de una persona física, nombre denominación social y/o razón social de una persona moral como partes actoras dentro de diversos procedimientos jurisdiccionales, así como, datos de empresas relacionadas con hechos jurídicos, y con su intención de participar como posibles proveedores sin serlo aún y cuya divulgación pudiera inclusive afectar sus relaciones comerciales o empresariales al dar a conocer consultas realizadas, correo electrónico personal y domicilio particular.



Lo anterior, debido a que se trata de datos personales de personas físicas e información de personas morales identificadas que se equipara a los mismos, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, párrafo primero, de la LGTAIP; 113, fracciones I y III, de la LFTAIP, en correlación con los numerales Cuarto y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales en Materia de Clasificación), que prevén lo siguiente:

LGTAIP

Artículo 116. *Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.*

[...]

LFTAIP

“Artículo 113. *Se considera información **confidencial**:*

- I. La que contiene **datos personales** concernientes a una persona física identificada o identificable;*
- II. ...*
- III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

...”

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación

“Cuarto.- *Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*



Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.”

“Trigésimo octavo.- Se considera susceptible de clasificarse como confidencial:

- I. Los datos personales, entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, se puede identificar de acuerdo a las siguientes categorías;
- ...
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y

...”

Aunado a lo anterior, es menester señalar que **el artículo 1º Constitucional dispone que todas las personas, sin limitar a físicas o morales, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte**, así como de las garantías establecidas para su protección constitucional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en que la propia Carta Magna autoriza.

Al respecto, si bien en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala el término personas, lo cierto es que dicho concepto debe interpretarse de manera amplia a las personas jurídicas en los casos en que ello sea aplicable.

En ese entendido, se considera que las personas morales, al igual que las personas físicas, poseen cierta información que, como en el caso de los datos personales, **se ubica en el ámbito de lo privado.**

Al respecto, cabe traer a colación lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, emitió la tesis I/2014, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en febrero de 2014, cuyo contenido señala lo siguiente:

PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE



Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE. Si bien el vocablo "persona" contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medida, el juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, si un derecho les corresponde o no pues, si bien existen derechos que sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso, existen otros que, evidentemente, corresponden sólo a las personas físicas, al referirse a aspectos de índole humana como son los derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad física; pero además, existen otros derechos respecto de los cuales no es tan claro definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya que, más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad dependerá del alcance y/o límites que el juzgador les fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la libertad ideológica.

De la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que si bien el vocablo persona contenido en el artículo 1º de la Constitución Federal comprende a las personas morales, lo cierto es que la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas, así como de los alcances y/o límites que el juzgador le fije.

De ese mismo modo, se trae a colación la tesis aislada P. II/2014, emitida en la décima época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en febrero de 2014, cuyo texto refiere lo siguiente:

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier





intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.

*Del criterio anterior, se desprende que el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; **sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas**, en tanto que también cuentan con **determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros** respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo.*

Por otra parte, la jurisprudencia P./J. 1/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo uno, libro dieciséis, marzo de 2015, Décima Época, materia constitucional, página 117, establece lo siguiente:

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo



establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.

*Del criterio citado, se desprende que el principio de interpretación más favorable a la persona **es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales**, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.*

En este sentido, se advierte que entre la información que pueda ser considerada como confidencial se encuentra aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, ello en razón de que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere como clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad.

Aunado a lo anterior, la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

En consecuencia, la información que podrá actualizar este supuesto de confidencialidad, es la siguiente:

- 1. La que se refiera al patrimonio de una persona moral.*
- 2. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.*

Con base en lo que precede, es de considerarse que proporcionar aquellos documentos vinculados a una persona moral, implicaría divulgar información de carácter confidencial.

*No es óbice para lo anterior, mencionar que **el nombre de una persona moral identificada y determinada como parte actora de un juicio**, reviste el carácter de **confidencial** pues daría cuenta de hechos presuntamente irregulares, con motivo del ejercicio de sus actividades, que en su caso se le hayan imputado; lo cual podría*



afectar sus derechos fundamentales relativos a la dignidad, honor, reputación, buen nombre o fama que gozan ante los demás.

Al respecto, cabe traer a colación la jurisprudencia número 1a./J. 118/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 3, de febrero de 2014, página 470, de la Décima Época, materia constitucional, en la cual se señala:

“DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el **concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.** Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros.”

De la jurisprudencia en cita, se advierte que el honor es el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.

*En el ámbito de lo jurídico, es un derecho humano que involucra la facultad de cada individuo de ser tratado de forma decorosa. Es decir, este derecho tiene dos elementos, el subjetivo, que se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y en un sentimiento objetivo, que es la estimación interpersonal de cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. **En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece.***





De lo antes expuesto, es posible advertir que los datos clasificados refieren a información que únicamente concierne a su titular, por lo que ésta incide en la privacidad de personas identificadas o identificables; en este sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 118 de la LFTAIP, a continuación, se exponen las razones, motivos o circunstancias, por lo cuales no se pueden proporcionar los datos personales referidos:

DATOS PARA CLASIFICAR	MOTIVACIÓN	FUNDAMENTO LEGAL
NOMBRE PERSONA FÍSICA	El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial	Artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
NOMBRE, DENOMINACIÓN y/o RAZÓN SOCIAL PERSONA MORAL	La denominación social y/o razón social de una persona moral permite individualizarla y distinguirla y por tanto se equipara al nombre de una persona física, máxime que el nombre de la parte actora en los procedimientos jurisdiccionales, o vinculado a consultas específicas, revela una decisión personal y refleja un acto de voluntad, como lo es establecer una controversia, o realizar consultas respecto de ciertos supuestos, lo cual constituye cuestiones de carácter estrictamente privado y, por ende, es información confidencial.	Artículos 108, 113 fracciones I y III y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL	El correo electrónico puede asimilarse al teléfono o domicilio particular, cuyo número o ubicación respectivamente se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo lo que la hace localizable. Por consiguiente, se trata de información de una persona física identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad.	Artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

DOMICILIO	El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.	Artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
------------------	--	--

Por las consideraciones que anteceden, en términos de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, de la LGTAIP y 44, fracción II, de la LFTAIP, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por la UNCP.

[...]"

Por lo expuesto, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procede a valorar las manifestaciones vertidas y se pronuncia con base en los siguientes:

CONSIDERANDO

PRIMERO. El Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 23, 43, 44, fracción II, 103, 106, fracción I, 111, 116, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública¹ (LGTAIP); 16, 64, 65, fracción II, 98 fracción I, 102, 106, 108, 113, fracciones I y III, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública² (LFTAIP); Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción I, Octavo, Noveno, y Trigésimo octavo, fracciones I y III de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*³ (Lineamientos) y su reforma⁴, respecto de la **clasificación parcial de la información como confidencial** manifestada por la a Unidad de Normatividad adscrita a la Oficialía Mayor para la atención de la solicitud de mérito.

¹ https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf

² https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf

³ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016#gsc.tab=0

⁴ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5671860&fecha=18/11/2022&print=true

SEGUNDO. Una persona solicitó la información relativa a los oficios generados en la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas.

En respuesta, la Enlace de Transparencia en la Oficialía Mayor, manifestó que la UNCP después de una búsqueda exhaustiva y razonable de la información en sus archivos físicos y electrónicos, se localizaron quinientos ochenta y tres archivos que obran en un total de mil setecientas cuarenta y un fojas útiles, equivalentes a 423 MB correspondientes a oficios firmados por la UNCP, en el periodo comprendido del quince de septiembre de veintidós al quince de septiembre de dos mil veintitrés, señalando que veintiún archivos de los quinientos ochenta y tres, se proporcionan en versión pública, toda vez que dichos documentos contienen información susceptible de ser clasificada como confidencial, consistente en el nombre de una personas físicas, nombre denominación social y/o razón social de personas morales, así como, partes actoras dentro de diversos procedimientos jurisdiccionales, datos de empresas relacionadas con hechos jurídicos, y con su intención de participar como posibles proveedores sin serlo aún y cuya divulgación pudiera inclusive afectar sus relaciones comerciales o empresariales al dar a conocer consultas realizadas, correo electrónico personal y domicilio particular de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la LGTAIP; 113, fracciones I y III, de la LFTAIP, en correlación con los numerales Cuarto y Trigésimo Octavo de los Lineamientos, toda vez que es información que únicamente concierne a su titular, dado a que incide en la privacidad de una persona física y/o moral identificada o identificable, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 118 de la LFTAIP.

TERCERO. De las manifestaciones realizadas por la UNCP adscrita a la Oficialía Mayor, se desprende la clasificación parcial como confidencial de los datos consistentes en nombre de una persona física, nombre denominación social y/o razón social de una persona moral como partes actoras dentro de diversos procedimientos jurisdiccionales, así como, datos de empresas relacionadas con hechos jurídicos, y con su intención de participar como posibles proveedores sin serlo aún y cuya divulgación pudiera inclusive afectar sus relaciones comerciales o empresariales al dar a conocer consultas realizadas, correo electrónico personal y domicilio particular contenidos en oficios generados por la UNCP, en el periodo comprendido del quince de septiembre de veintidós al quince de septiembre de dos mil veintitrés, mismos que podrían actualizar la



causal de clasificación prevista en el artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP y Cuadragésimo de los Lineamientos.

Por lo anterior, este Comité procederá a analizar la clasificación parcial de la información como confidencial de los datos referidos, de acuerdo a los siguientes preceptos:

Debe tenerse en cuenta que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos regulado el derecho a la vida privada, entendida como el límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona:

"Artículo 6o.

...
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

...
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes."

"Artículo 16.

...
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros."

Los artículos 44, fracción II y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP, establecen lo siguiente:

"Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

...
II. *Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados..."*



“Artículo 116.

...

Asimismo, será información **confidencial** aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales...”.

Los artículos 65, fracción II, 113, fracciones I y III, 117 y 140, fracción I de la LFTAIP, señalan lo siguiente:

“Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:

...

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados...”.

“Artículo 113. Se considera *información confidencial*:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrá tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.”

...

“Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

II. Por ley tenga el carácter de pública;

III. Exista una orden judicial;

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o





V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.”

...

“Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

I. Confirmar la clasificación...”.

Por otra parte, los numerales Cuarto, Trigésimo octavo, fracciones I y II de los Lineamientos, establecen lo siguiente:

“Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.”

“Trigésimo octavo. Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial:

I. Los datos personales, entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa mas no limitativa, se pueden identificar de acuerdo a las siguientes categorías:

- 1.** Datos identificativos: El nombre, alias, seudónimo, domicilio, código postal, teléfono particular, sexo, estado civil, teléfono celular, firma, clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de Elector, Matricula del Servicio



Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, localidad y sección electoral, y análogos.

- 7.** *Datos sobre situación jurídica o legal: La información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos;*

II. *La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y*

...
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los integrantes de los sujetos obligados facultados para ello."

Personas Físicas.

Con base a la normatividad antes señalada, se considera como información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona cuya difusión incide en su esfera personal, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Cabe señalar que, para que dicha información se clasifique con ese carácter, es necesario atender lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo octavo de los Lineamientos, que señala en síntesis lo siguiente:

- a) Que se trate de datos personales.
- b) Que la información sea concerniente a una persona, y
- c) Que ésta sea identificada o identificable.

Derivado de lo anterior, este Comité de Transparencia considera que se está ante una excepción al derecho de acceso a la información expresamente prevista en la Ley para garantizar la protección de la información confidencial ya referida, en virtud de que el derecho de acceso a la información no reviste



una naturaleza absoluta, sino que está sujeto a límites establecidos en otros supuestos fundados y constitucionalmente tutelados, como en el caso que nos ocupa; de ahí la obligación de los sujetos obligados a proteger los datos personales y la información de naturaleza confidencial.

Es importante mencionar, que la normativa establece que los datos personales se refieren a cualquier información concerniente a una persona física que la pueda hacer identificada o identificable.

De tal manera que, dicha información puede estar expresada en forma numérica, alfabética, gráfica, alfanumérica, fotográfica, acústica o de cualquier otro formato, por lo tanto, una persona puede ser identificable cuando su identidad se expone de manera directa o indirectamente a través de cualquier información.

Bajo ese contexto, el término “cualquier información” que permita identificar o hacer identificable a una persona física constituye un dato personal, en ese sentido, dicho término señalado en la normatividad, obliga a realizar una amplia interpretación de la naturaleza o del contenido de la información y de su soporte técnico, previendo que pueda considerarse como dato personal.

Otro aspecto relevante a destacar, es el término “concerniente”, el cual permite determinar el alcance de la información que deba considerarse como datos personales, por lo tanto, cuando la información se refiere o versa sobre una persona física; cuando dicha información propicie la intención de evaluar, tratar o influir en la situación o comportamiento de una persona física y que dicha información repercuta en los derechos e intereses de una determinada persona, y por consecuencia, de la revelación de la información el titular de los datos personales pueda ser tratado de forma diferente por otras personas, se puede concluir que a la información debe dársele el tratamiento de datos personales.

Bajo ese contexto, se advierte que cualquier información que revele, de manera enunciativa más no limitativa, la situación o identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social, ya sea de manera directa o indirecta de una persona, debe protegerse por el responsable y/o sujeto obligado.



En ese sentido, cuando un documento contenga partes o secciones confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deben elaborar una versión pública en la que se testen las partes clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación, en términos del artículo 108 de la LFTAIP.

En este orden de ideas, este órgano colegiado considera que nos encontramos ante una excepción al derecho a la información expresamente prevista en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando la procedencia de la versión pública para atender lo requerido por el particular y al mismo tiempo garantizar la protección de la información confidencial ya referida.

Así, el derecho de acceso a la información no reviste de una naturaleza absoluta, sino que está sujeto a límites establecidos en otros supuestos fundados y constitucionalmente tutelados, como en el caso que nos ocupa; de ahí la obligación de los sujetos obligados a proteger los datos personales y la información de naturaleza confidencial.

Al respecto, mediante la tesis aislada numero P.LXVIII/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, de diciembre de 2009, página 7, de la Novena Época, en materia constitucional, la SCJN ha reconoce que el derecho a la intimidad es el derecho fundamental de las personas, de no ser conocido por otros ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, conforme a lo siguiente:

DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. *Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus*





caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.
..."

Así, el derecho a la intimidad es el derecho de todo individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos. Igualmente, el derecho a la propia imagen es el derecho de decidir, de forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás.

Personas Morales.

El nombre de una persona moral identificada y determinada como parte actora de un juicio, reviste el carácter de confidencial pues daría cuenta de hechos presuntamente irregulares, con motivo del ejercicio de sus actividades, que en su caso se le hayan imputado; lo cual podría afectar sus derechos fundamentales relativos a la dignidad, honor, reputación, buen nombre o fama que gozan ante los demás.

En ese tenor, para clasificar la información como confidencialidad bajo el supuesto previsto en las causales referidas, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el



derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. Por consiguiente, la información que podrá actualizar este supuesto, entre otras, es la siguiente:

- 1) La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
- 2) La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

Bajo esa óptica, se trae a colación la tesis aislada P. II/2014, emitida en la décima época, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en febrero de 2014, cuyo texto refiere lo siguiente:

“PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades





por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.”

De lo anterior, se desprende que el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo.

Ahora bien, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial de personas físicas o morales, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En relación con el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de información requerida tanto de personas físicas como morales, se trae a colación la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, emitida por la Segunda Sala de la SCJN, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, de mayo de 2008, página 229, de la Novena Época, materia constitucional, misma que a la letra señala:

“DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial





es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.

...

Como se observa, los individuos cuentan con una garantía de seguridad jurídica, que los protege de no ser molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato de autoridad competente, debidamente fundado y motivado; de esta forma, la vida privada personal y familiar debe quedar excluida del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la CPEUM.

Es decir, en el artículo 16, primer párrafo constitucional, **reconoce el derecho a la privacidad de las personas, lo que implica no ser sujeto de intromisiones o molestias en el ámbito reservado de su vida, intimidad o identidad;** máxime que no se tiene conocimiento de una sanción firme en contra del servidor público de interés.

Ahora bien, la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*⁵, prevé lo siguiente:

“Artículo 12. *Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”*

A su vez, la *Convención Americana sobre los Derechos Humanos*⁶ establece lo siguiente:

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

⁵ [La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas](#)

⁶ [:: Tratados Multilaterales > Departamento de Derecho Internacional > OEA :: \(oas.org\)](#)



1. *Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
2. *Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
3. *Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*"

De igual manera, en el *Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos*⁷, se señala lo siguiente:

"Artículo 17

1. *Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
2. *Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques...*"

De acuerdo con dichas disposiciones internacionales, se considera que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni de ataques a su honra o reputación teniendo la protección de la ley contra éstas.

En esa tesitura, se observa que existe normativa tanto nacional como internacional que obliga al Estado Mexicano a realizar un cuidado especial en la honra y la reputación de las personas, convirtiéndolos en un derecho fundamental y en una premisa en su actuación.

En cuanto al derecho al honor, la jurisprudencia número 1a./J. 118/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la SCJN, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 3, de febrero de 2014, página 470, de la Décima Época, materia constitucional, se señala, lo siguiente:

"DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser

⁷ [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos | OHCHR](#)



respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros.."

Como se observa, el honor es el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. En el campo jurídico, es un derecho humano que involucra la facultad de cada individuo de ser tratado de forma decorosa.

Este derecho tiene dos elementos, el subjetivo, que se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y en un sentimiento objetivo, que es la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad.

En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad, esto es, el aspecto íntimo del individuo. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, la trascendencia exterior de la afectación del aspecto subjetivo en comento.

Es así que la SCJN considera que el derecho al honor y a la intimidad amparan la buena reputación de una persona física o moral, protegiéndola frente a expresiones que la hagan desmerecer de la consideración ajena, toda vez que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias la información divulgada acerca de la conducta de una persona puede constituir ataque a su honor y a su intimidad.



Consecuentemente, se procede a realizar el análisis de los datos personales contenidos en los oficios y correos electrónicos generados en la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, en el periodo comprendido del quince de septiembre de dos mil veintidós al quince de septiembre de dos mil veintitrés.

Nombre de persona física

Es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial, en concordancia con lo establecido en los artículos 111, 116 párrafos primero y segundo de la LGTAIP; 108, 113, fracción I de la LFTAIP; 3, fracción IX de la LGPDPSO, así como los numerales Noveno y Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales

Nombre, denominación y/ o razón social persona moral.

La denominación social y/o razón social de una persona moral permite individualizarla y distinguirla y por tanto se equipara al nombre de una persona física, máxime que el nombre de la parte actora en los procedimientos jurisdiccionales, o vinculado a consultas específicas, revela una decisión personal y refleja un acto de voluntad, como lo es establecer una controversia, o realizar consultas respecto de ciertos supuestos, lo cual constituye cuestiones de carácter estrictamente privado y, por ende, es información confidencial.

Domicilio.

Es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.

Correo electrónico persona.

El correo electrónico puede asimilarse al teléfono o domicilio particular, cuyo número o ubicación respectivamente se considera como un dato personal,



toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo lo que la hace localizable. Por consiguiente, se trata de información de una persona física identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad.

En consecuencia, es dable concluir que los datos relativos al nombre de una persona física, nombre denominación social y/o razón social de personas morales, así como, partes actoras dentro de diversos procedimientos jurisdiccionales, domicilio particular y correo electrónico personal contenidos en oficios generados en la UNCP, en el periodo comprendido del quince de septiembre del dos mil veintidós al quince de septiembre de dos mil veintitrés, mismos que se ponen a disposición de la persona solicitante un total de quinientos ochenta y tres archivos que obran en un total de mil setecientas cuarenta y un fojas útiles versión pública vía formato PDF, ya que actualizan la causal de clasificación establecida en los artículos 116, párrafo primero, de la LGTAIP; 113, fracciones I y III, de la LFTAIP, en correlación con los numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción I, Octavo, Noveno, y Trigésimo octavo, fracciones I y III de los Lineamientos, al referir información confidencial por considerarse datos personales, la cual no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la persona.

Derivado de lo anterior, este Comité de Transparencia considera que se está ante una excepción al derecho de acceso a la información expresamente prevista en la Ley, para atender lo requerido por el particular y al mismo tiempo garantizar la protección de la información referida en virtud de que el derecho de acceso a la información no reviste una naturaleza absoluta, sino que está sujeto a límites establecidos en otros supuestos fundados y constitucionalmente tutelados, como en el caso que nos ocupa.

CUARTO. Relacionado con la versión pública de oficios generados en la UNCP, en el periodo comprendido del quince de septiembre del dos mil veintidós al quince de septiembre de dos mil veintitrés, puesta a disposición del particular, es oportuno formular el análisis correspondiente de conformidad con los siguientes preceptos legales:





Los artículos 106, 108, 118 y 140, fracción I de la LFTAIP, establecen lo siguiente:

“Artículo 106. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional para la elaboración de versiones públicas en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados...”.

“Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar **una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación...**”.

“Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o **confidenciales**, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una **versión pública** en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.”

“Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

I. Confirmar la clasificación...”

Por otra parte, los numerales Cuarto y Noveno de los Lineamientos, establecen lo siguiente:

“Cuarto. Para **clasificar la información** como reservada o **confidencial**, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.”



“Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una **versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen**, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.”

Con base a la normatividad señalada, se considera información clasificada como confidencial la que se encuentra dentro del supuesto del artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP, la cual no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Derivado de lo anterior, este Comité de Transparencia considera que nos encontramos ante una excepción al derecho a la información expresamente prevista en la Ley, cuya difusión puede vulnerar o evidenciar la intimidad de una persona física identificada e identificable, por lo que se acredita la procedencia de la clasificación de la información como confidencial.

En virtud de lo anterior, este Comité de Transparencia aprueba la versión pública de oficios generados en la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, en el periodo comprendido del quince de septiembre del dos mil veintidós al quince de septiembre de dos mil veintitrés, por contener datos personales cuya difusión puede afectar su esfera privada de las personas físicas y morales.

Por lo tanto, este Comité de Transparencia considera que se actualiza la excepción al derecho de acceso a la información prevista en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I y III de la LFTAIP, toda vez que divulgar datos personales de una persona física y moral identificada e identificable, vulneraría el derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que han sido ratificados por nuestro país.

Por lo anterior, este Órgano colegiado analizó el caso y se apegó al procedimiento contenido en los artículos 44, fracción II de la LGTAIP, así como 65, fracción II de la LFTAIP y se:



RESUELVE

PRIMERO. Se **confirma la clasificación parcial de la información como confidencial** de los datos consistentes en nombres de personas físicas, nombre denominación y/o razón social persona moral, correo electrónico personal y domicilio contenidos en veintiún archivos relacionados con la materia de la solicitud de información con número de folio **330026323002725, presentada por la Oficialía Mayor de esta dependencia**, en términos de los artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP; y 113, fracciones I y III, de la LFTAIP, de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en los **CONSIDERANDOS SEGUNDO** y **TERCERO** de la presente resolución.

SEGUNDO. Se aprueba la versión pública constante de veintiún archivos, por contener información clasificada como confidencial, conforme a los artículos 107, 111, 116 primer párrafo de la LGTAIP, y 108, 113, fracciones I y III, 118 y 119 de la LFTAIP, en términos del Considerando **Cuarto**.

TERCERO. Notifíquese a la persona solicitante la presente resolución a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción V de la LFTAIP.

CUARTO. En cumplimiento del artículo 3, fracción XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en relación con el 7 de la LFTAIP, el particular podrá interponer, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución por sí o a través de su representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 147 y 148 de la LFTAIP, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No, 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, en esta Ciudad de México o ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El formato y forma de presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlos en la página de Internet del mencionado Instituto, en la dirección electrónica www.inai.org.mx

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia: María del Socorro de Paz Fuentes, Coordinadora de Planeación, Operación y Servicios, en suplencia del Titular de la Dirección General de





Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales y Titular del Área Coordinadora de Archivos; Porfirio Ugalde Reséndiz Titular del Área de Especialidad en Responsabilidades, en el ramo Hacienda; y Juan Carlos Reyes Ballesteros, Director de Planeación Estratégica y Transparencia, en suplencia del Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

María del Socorro de Paz Fuentes

Porfirio Ugalde Reséndiz

Juan Carlos Reyes Ballesteros

